



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

EXPTE: 34.819/2022

“TRANSPORTE LOPE DE VEGA SACI c/ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar pronunciamiento en la presente causa, se procede a emitir el voto:

EL DOCTOR WALTER CARNOTA DIJO:

Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de la Sala en virtud de la impugnación de deuda presentada por TRANSPORTE LOPE DE VEGA SACI contra la resolución administrativa 314-E-2022 por la cual se le reclaman diferencias de contribuciones patronales, por incorrecto encuadre de las disposiciones establecidas en el artículo 2do. del Decreto 814/2001, correspondiente a los períodos 05/2015 a 04/2017, por un total de \$ 15.722.557,02 en concepto de capital, \$ 29.551.221,77 por intereses y \$ 3.144.511,40 por multa conforme RG 1566 (t.o.2010).

Desde el punto de vista formal propiciare la habilitación de la instancia judicial por cuanto si bien en nuestro derecho positivo, la regla solve et repete ha sido considerada congruente con las garantías procesales que emanan del art. 18 de la CN y 8° del Pacto de San José de Costa Rica, el más Alto Tribunal de la Nación dispuso atenuar su rigurosidad en aquellos casos en que exista una desproporcionada magnitud entre la suma que el contribuyente debe ingresar y su concreta capacidad económica (conf. CSJN 21/12/89 “Micrómnibus Barrancas de Belgrano” Fallo 312:2490; 11/06/98 “Cadesu Cooperativa de Trabajo Ltda. c/DGI” Fallo 312:1741; 02/08/05 “Centro Diagnóstico de Virus SRL c/AFIP” Fallo 328:2938). Precisamente, el apelante en su escrito de impugnación expresa que se encuentra imposibilitado de dar cumplimiento a la exigencia del depósito previo dado lo desproporcionado del monto reclamado y su real capacidad económico financiera lo que tornaría ilusorio su derecho de defensa en razón del importante desapoderamiento que podría significar su cumplimiento.

A efecto de acreditar tal aserto acompaña balances correspondientes a los ejercicios cerrados en fecha 31/12/2020, 31/12/2019, 31/12/2018, 31/12/2017 de los cuales surge, según expresa, que no posee fondos suficientes para afrontar la exigencia prevista por el artículo 15 dela ley 18.820.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

La parte demandada rechaza los agravios vertidos. Sostiene que el único parámetro que debe tomarse en consideración a los efectos de determinar si un empleador encuadra en el inciso a. o b. del art. 2º del Decreto 814/2001 es su monto de facturación anual, sin perjuicio de la caracterización que le corresponda en el marco de las normas de fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas. El importe a considerar a los fines de determinar si el empleador deberá tributar de acuerdo con uno y otro inciso, es el de \$ 48.000.000 establecido por el Decreto N° 1009/01, excedido el cual debió haberse utilizado la alícuota prevista en el inciso a) del artículo 2do. Del decreto 814/2001. Afirma que ese límite por el momento no ha sido a modificado hasta que el PEN disponga lo contrario.

Entiendo que asiste razón a la impugnante.

Del juego armónico de las resoluciones y decretos aplicables surge que el decreto 1009/2001 ha variado sustancialmente el contenido de la Resolución 24/01 de la SEPyme y también los montos a partir de los cuales corresponde aplicar la alícuota numérica aplicable en concepto de contribuciones patronales. Ello como consecuencia del proceso inflacionario que desde hace mucho tiempo azota nuestro país.

Si bien el beneficio de reducción de porcentaje de contribuciones patronales derivados del Decreto 814/01 se complementa con el Decreto 1009/01, que estableció la definición de PYME por remisión a la Resolución N° 24/2001. Esta última, a través de su artículo 1º, dispuso que serían consideradas micro, pequeñas y medianas empresas aquellas cuyas ventas totales expresadas en pesos no superen los valores por ella establecidos. A posteriori dichos montos fueron actualizados en virtud de distintas resoluciones dictadas por de la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (así: 147/2006, 21/2010, 50/2013, 357/2015, 11/2016, 103-E/2017) para evitar la desnaturalización del espíritu de la ley cuyo objetivo era promover el desarrollo de las PYMES.

En virtud de lo anterior entiendo que el encuadramiento de PYME quedará esclarecido si la facturación de la infraccionada arroja un monto inferior al límite establecido por las resoluciones antes citadas que correspondan al periodo por el cual se efectuaron los cargos.

Lo antes expresado viene a coincidir con el criterio adoptado por mayoritaria jurisprudencia de esta Cámara (ver Sala III del 11/05/2009 “Codimat SA c/AFIP -DGI s/Impugnación de deuda”, Sala I sent. del 23/02/2015 “Salud y Belleza SA c/AFIP s/Impugnación de deuda”).

Cabe señalar que el Decreto 814/2001 fue reformado por la ley 27.430. También la ley 27541, vigente desde el 23 de diciembre de 2019, introdujo una serie de modificaciones con respecto al cálculo y liquidación de las





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

contribuciones patronales mediante la derogación de los decretos 814/2001, 1.009/2001 y artículo 173 de la ley 27.430.

Ello así el análisis efectuado se acota al periodo del cargo, revocándose la resolución recurrida en los términos indicados.

El sentido de mi voto me exime del tratamiento de los demás agravios vertidos.

En cuanto a los honorarios, teniendo presente que la ley 27.423 no puede ser aplicada en autos en forma mecánica dado que dicho cuerpo legal no contempla expresamente el proceso de impugnación de deuda. Ello así y teniendo presente lo expresado por el Superior Tribunal de la Nación en cuanto a que la regulación de honorarios no debe depender exclusivamente del monto del reclamo sino que deberá ser ponderada por los jueces bajo pautas de razonabilidad, atendiendo a la naturaleza, complejidad del asunto, mérito de la causa, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado (CSJN Fallos 257:142; 296:126; 302:534 y sus citas; 320:495; 339:216 entre otros) y lo dispuesto por el artículo 1.255 del Código Civil y Comercial de la Nación se regulan los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora en 250 UMA (\$ 3.733.250) conf. CSJN Acordada 09/2023, importe al que se adicionará IVA en caso de corresponder (conf. CSJN “Compañía General de Combustibles SA s/recurso de apelación” Fallos 316:1523). Con respecto a los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte demandada, deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 2° de la ley 27.423.

Por lo expuesto propongo: Se declare habilitada la presente instancia, se haga lugar al recurso de apelación presentado revocando la resolución recurrida. Imponer las costas a la vencida (art. 68 CPCCN), y por último regular los honorarios de representación letrada de la parte actora en 250 UMA (\$ 3.733.250) conf. CSJN Acordada 09/2023, importe al que se adicionará IVA en caso de corresponder. Con respecto a los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte demandada, deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 2° de la ley 27.423.

EL DOCTOR JUAN FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Adhiero al voto del Dr. Walter F. Carnota.

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

La empresa TRANSPORTE LOPE DE VEGA SACI cuestiona la Resolución Administrativa 314-E-2022 en cuanto reclama el pago de diferencias por lo que considera una errónea aplicación de la alícuota prevista en el inciso b.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

del artículo 2° del Decreto 814/2001 en lugar de aplicar el inciso a) de la mencionada norma, atento las ganancias obtenidas que, según sostiene el organismo fiscal, habrían superado el límite de ventas previsto por el decreto 1009/01 durante los periodos 05/2015 a 04/2017. El reclamo efectuado es por un total de \$ 48.418.290,19 comprensivo de \$15.722.557,02 por capital, \$ 29.551.221,77 por intereses y una multa de \$ 3.144.511,40.

Coincido con el vocal preopinante en cuanto a la conveniencia de proceder a la apertura de la presente instancia, dado lo elevado de la pretensión fiscal con respecto a su concreta capacidad económica, atento a que conforme la documentación acompañada no contaría con fondos suficientes para dar cumplimiento a la exigencia prevista en el artículo 15 de la ley 18.820. La solución contraria podría importar una lesión a la garantía constitucional de la defensa en juicio (art. 18 CN).

Cabe recordar que si bien en nuestro derecho positivo, la regla solve et repete ha sido considerada congruente con las garantías procesales que emanan del art. 18 de la CN y 8° del Pacto de San José de Costa Rica, el más Alto Tribunal de la Nación dispuso atenuar su rigurosidad en aquellos casos en que exista una desproporcionada magnitud entre la suma que el contribuyente debe ingresar y su concreta capacidad económica (conf. CSJN 21/12/89 “Micrómnibus Barrancas de Belgrano” Fallo 312:2490; 11/06/98 “Cadesu Cooperativa de Trabajo Ltda. c/DGI” Fallo 312:1741; 02/08/05 “Centro Diagnóstico de Virus SRL c/AFIP” Fallo 328:2938). Precisamente, el apelante en su escrito de impugnación expresa que se encuentra imposibilitado de dar cumplimiento a la exigencia del depósito previo dado lo desproporcionado del monto reclamado y su real capacidad económico financiera.

Pasaré a analizar el fondo de la cuestión aquí controvertida.

La impugnante es una empresa dedicada al transporte automotor urbano y suburbano de pasajeros. Según explica, la realidad económica la lleva a afirmar sin hesitación que la disminución de la alícuota dispuesta por el legislador tuvo en su espíritu contemplar contribuyentes como es su caso pues siendo permisionaria de varias líneas de transporte de pasajeros debe considerarse que quien fija las tarifas que ha de abonar el pasajero es el Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos de la Nación. Explica la impugnante que analizando la estructura de costos que confecciona el Estado se observa que el propio Estado considera una contribución patronal del 17%, no obstante en el acto que aquí se controvierte pretende percibir un 21% sobre el mismo concepto. La pretensión de vulnerar esa estructura de costos sin la posibilidad de trasladar ello al precio





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

final de pasaje es violatoria de una garantía de orden constitucional, convirtiendo al decisorio que impugna es arbitrario.

Planteada así la cuestión la apelante entiende que el criterio seguido por su parte para la liquidación de las contribuciones no es en modo alguno antojadizo, sino que se desprende de una interpretación razonable de la normativa vigente, pues en los considerandos del decreto 1009/2001 se establece que debe tenerse presente que de acuerdo a lo dispuesto en el mismo inciso a. del citado artículo 2° del decreto 814/2001 modificado por la ley 25.453, quedan excluidos de sus disposiciones aquellos empleadores cuya actividad económica encuadre en las disposiciones de la ley 24.476 y que resulta procedente aplicar a tales fines las disposiciones de la resolución de la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía N° 24 y su modificatoria. Recuerda que el objetivo primario del Decreto 814/01 es brindar un beneficio fiscal a las PyMES disminuyendo la presión fiscal y fomentar la generación de empleo. A su juicio la conducta asumida por el organismo al determinar la deuda que reclama parte de una interpretación caprichosa al establecer un monto fijo sin actualización, sin tener en cuenta las particularidades de la economía argentina. Así, su parte liquidó las contribuciones patronales según pautas cuantitativas de facturación anual establecidas por diversas resoluciones que sucedieron a la original Resolución N° 24/01 (SEPyME) actualizándola, como la Res. 675/2002 SEPYME, Disposición 147/2006 SEPYME, Res. 21/2010 SEPYME, Res. 50/2013 SEPYME, Res. 357/2015 SEPYME, Res. 11/2016 SEPYME, 103-E/2017, 154/2018, 220/2019, que deberían haber sido tenidas en cuenta a efectos de subsumir la situación de TRANSPORTE LOPE DE VEGA SACI en las mismas a efecto de quedar comprendida en el beneficio de reducción de contribuciones patronales conforme lo prevé el decreto 814/2001 artículo 2° inciso b. Explica que los decretos 814/01 y 1009/01 no consagran la estática de los topes para acceder al beneficio de reducción de alícuotas, en cuanto al valor de ventas anuales. Ello toda vez que la circunstancia que la Resolución 1095/01 de AFIP mencione el importe desactualizado, no resulta óbice para que el beneficio se extienda a partir de la vigencia de las citadas resoluciones.

No advierto que la impugnación formulada resulte viable.

Sobre el tema ya he fijado mi posición como vocal preopinante en la sentencia definitiva 150.132 del 19 de febrero de 2013 recaída en los autos “Granja Dos Cuñados SA c/AFIP” que he reiterado al votar la causa “Arpenta Cambios SA c/AFIP” sent. del 17/03/17.

En efecto, la ley 24.476 creó un régimen jurídico especial tendiente a promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

considerando como tales a aquellas cuyo plantel no supere los cuarenta trabajadores y tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad fije un organismo administrativo -Comisión Especial de Seguimiento- que sería el encargado de evaluar el impacto que, sobre las relaciones de trabajo, tuviera la creación de un régimen laboral especial en la materia (arts.83 y 105, ley citada).

De lo expuesto surge que la noción de pequeña y mediana empresa es fluctuante al menos en materia económica pues, aunque la empresa no llegue a superar los cuarenta trabajadores bien podría ser considerada una gran empresa cuando su facturación anual supere cierto monto, lo que revelaría su potencialidad económica.

Con posterioridad se sancionó la ley 25.300 -ley de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa- cuyo objetivo sería el fortalecimiento competitivo de dichas entidades aclarándose que la autoridad de aplicación será la que definirá las características de las empresas para ser tipificadas como: micro, pequeña o mediana aclarando que, entre sus tareas está la de revisar anualmente la definición de micro pequeña y mediana empresa a fin de actualizar las parámetros y especificidades contempladas en la definición adoptada (ver art. 1º, ley citada) que no sería otra que la establecida por el art. 83 de la ley 24.467.

En cumplimiento de los fines establecidos por la ley 24.467 se dictó el decreto 943/97 que creó la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa como autoridad de aplicación de la ley 24.467 y es, dicha autoridad, la que determinó que empresas serían consideradas micro, pequeñas o medianas tomando como referencia que las ventas totales anuales no superaran ciertos valores que eran diferenciados según se trate de empresas de construcción, servicios, comercio, industria y minería y agropecuario.

El art. 2º del Decreto 814/2001 establece una alícuota del 21% para los empleadores cuya actividad principal sea la locación y/o prestación de servicios con excepción de los comprendidos en las leyes 23.551, 23.660, 23.661 y 24.467 y uno sustancialmente menor para los restantes empleadores no comprendidos en el inciso anterior, esto es los empleadores considerados titulares de una pequeña o mediana empresa, siendo dicha resolución afectada por la sanción de la ley 25.453 que redujo la alícuota al 20%.

Cabe destacar que las anteriores directivas no tienen un carácter absoluto pues por la propia ley 25.414 que declaró la emergencia pública se facultó al Poder Ejecutivo a eliminar exenciones en materia fiscal y/o contributiva y por ello se dictó el decreto 1.009/2001 estableciendo que las pequeñas y medianas empresas estarían comprendidas en los términos del art. 2º inciso a) del decreto





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

814/2001 en la medida que sus ventas totales anuales superen los 48.000.000 millones de pesos que es, precisamente, lo que sucede con el apelante.

Como ya expresara la definición de pequeña y mediana empresa es mutable en nuestro ordenamiento jurídico y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa tiene facultades para tipificar que entidades productivas entran en dicha tipología o no, exclusivamente a los fines laborales (art. 83 ley 24.467) pero no fiscales y/o contributivos, debiendo prevalecer directivas como las derivadas de la ley 25414 que es un cuerpo normativo de emergencia pública.

Ahora bien, el artículo 1° del Decreto 1009/01 dispone que a los efectos de lo establecido en el artículo 2° del decreto 814/01 resultan comprendidos en el inciso a) de la referida norma, aquellos empleadores cuya actividad principal encuadre en el sector “Servicios” o en el sector “Comercio” de acuerdo con lo dispuesto en la resolución de la ex Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa N°24 del 15/02/2001 siempre que sus ventas totales anuales, calculadas en función de lo previsto en la citada resolución superen en todos los casos los 48.000.000.

La inclusión en el inciso a) del artículo 2° de la Resolución 24/01 de los empleadores cuya actividad principal encuadre en el sector comercio conjuntamente con aquellos cuya actividad principal sea la locación y prestación de servicios respondió a lo que se entendió una necesidad de otorgar un tratamiento unificado a ambos sectores (párrafo tercero del considerando del decreto 1009/01).

Cabe advertir que en el párrafo citado al añadirse la frase “a estos efectos” queda aclaro que el tratamiento unificado de las actividades comerciales y las de locación y prestación de servicios se refiere exclusivamente a los fines previsionales plasmados en el decreto 814/01. Además, al disponerse en el artículo 1° del Decreto 1009/01 que las actividades comerciales y las de servicios quedan alcanzadas por el inciso a) del artículo 2° del decreto 814/01 siempre que sus ventas totales anuales calculadas en función de lo previsto en la Resolución N°24/01 superen en todos los casos los \$48.000.000 se reconoce un único monto de ventas totales anuales aplicables a ambas actividades.

En otras palabras, el Decreto 1009/01 dispuso un tratamiento unificado, en materia de contribuciones patronales, a los dos tipos de emprendimientos, y estableció para ello un monto máximo de ventas totales anuales común a los dos rubros (comercio y servicio). Superado dicho limite el empleador deberá aplicar la alícuota mayor que prevé el inciso a) del artículo 2° del Decreto 814/2001.

Por último, solicita la impugnante la condonación de multa e intereses aplicados pues según entiende, para la aplicación de una multa es necesario que se





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

acredite el acontecimiento de un hecho antijurídico y culpable, extremo que en el caso no aconteció. Es más, según refiere, su conducta no puede ser tachada ni de culpable ni negligente dado que su parte efectuó el cálculo de las contribuciones patronales conforme lo indica la normativa que entiende aplicable, ingresándolas en su totalidad en tiempo y forma.

No puedo compartir tal aseveración dado que en lo atinente al cumplimiento de las exigencias de seguridad social el mero incumplimiento genera la consiguiente responsabilidad y sanción sin que tenga cabida el elemento subjetivo (ver esta Sala sent. del 19/10/98 “Pilot Pen SA”), y no encuentro en la causa elementos suficientes que justifiquen apartarme de la decisión administrativa que se recurre.

Por último y con relación a los honorarios, teniendo en cuenta la calidad de la labor realizada, la facultad que otorga al magistrado el artículo 1255 del C.C. y Ccial de la Nación, se establecen los honorarios de representación letrada de la parte de la parte actora en 10 UMA (\$149.330) CSJN Ac.09/2023. Con respecto a la representación letrada de la parte demandada, se fijan sus honorarios en 15 UMA (\$223.995), conf. CSJN Ac. 09/2023, importes a los que se adicionará IVA en caso de corresponder.

En definitiva, propongo declarar habilitada la presente instancia judicial, confirmar la resolución recurrida, imponer las costas a la vencida (art. 68 CPCCN), regular los honorarios de representación letrada de la parte actora en 10 UMA (\$ 149.330). Con respecto a los correspondientes a la representación letrada de la parte demandada, se establecen los mismos en 15 UMA (\$ 223.995) conf. CSJN Ac. 09/2023.

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal, por mayoría, **RESUELVE:** 1º) Declarar habilitada la presente instancia judicial, 2º) Hacer lugar al recurso de apelación presentado, 3º) Revocar la resolución recurrida, 4º) Imponer las costas a la vencida (art. 68 CPCCN), 5º) Regular los honorarios de representación letrada de la parte actora en 250 UMA (\$ 3.733.250) conf. CSJN Acordada 09/2023, importe al que se adicionará IVA en caso de corresponder. Con respecto a los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte demandada, deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 2º de la ley 27.423. Regístrese, notifíquese, publíquese y, oportunamente, remítase.

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

NORA CARMEN DORADO

Juez de Cámara

Ante mí: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI

Secretaria de Cámara

ALP.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

